

**CAUSA: “ALCIBIADES LEZME
LESME Y OTRO S/ SUPUESTOS
DELITOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE E INVASION DE
INMUEBLE AJENO EN MINGA
GUAZU”.-----**

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los cinco.días del mes de Julio del año Dos Mil Cinco, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, WILDO RIENZI GALEANO y SINDULFO BLANCO**, por ante mi el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: “**ALCIBIADES LEZME LESME Y OTRO S/ SUPUESTOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE E INVASION DE INMUEBLE AJENO EN MINGA GUAZU**”, a fin de resolver el recurso de Apelación y Nulidad planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 34 de fecha 4 de Junio de 2004, dictado por el Tribunal de Apelación; Primera Sala, de la circunscripción Judicial del Alto Paraná.--

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente;-----

C U E S T I O N E S :

¿Es nula la sentencia en apelada ?.----- En caso contrario, ¿ se halla ella ajustada a Derecho ?.-----

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: Dra. **ALICIA PUCHETA DE CORREA**.....-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Pucheta de Correa, dijo: El recurrente al expresar sus agravios en cuanto a la Nulidad se refiere a cuestiones que pueden ser estudiadas conjuntamente con el Recurso de Apelación. Por lo demás, observadas las constancias procesales, no se verifican violaciones de las formas sustanciales del juicio, ni se ha incurrido en vicios o defectos de los que por expresas disposiciones del derecho, anulen las actuaciones. Siendo ello así, es inaplicable al caso lo dispuesto por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, en concordancia con el Art. 499 del Código de Procedimientos Penales, por lo que dicho recurso debe ser declarado desierto.-----

A su turno los Doctores, **WILDO RIENZI GALEANO y SINDULFO BLANCO**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Dra. Pucheta de Correa prosiguió diciendo: Por Sentencia definitiva N° 09 de fecha 13 de octubre de 2003, (Fs.227/240), dictada por el Juzgado de Liquidación y Sentencia, N° 3, a cargo de la Juez Carmen Teresa Barrios, resolvió: **ABSOLVER DE CULPA Y PENA**, a los procesados **ALCIBIADES LESME LESME y DIONISIO FERNENDEZ BOGADO.**, **DEJANDO SIN EFECTO TODAS LAS MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL O REAL QUE HAYAN SIDO IMPUESTAS AL CITADO CIUDADNO COMO CONSECUENCIA DE ESTE PROCESO...(SIC)** -----

Posteriormente el Tribunal de Apelación , Primera Sala, de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, resolvió según Acuerdo y Sentencia N° 34 de fecha 04 de Junio de 2.004 (fs. 284/290), resolvió: **1.- CONFIRMAR el punto dispositivo primero**

del fallo apelado, en la parte que absuelve de culpa y pena a **DIONISIO FERNANDEZ BOGADO**. 2.- **REVOCAR** el punto dispositivo primero del mismo fallo, en la parte que absuelve de culpa y pena del mismo fallo a **ALCIBIADES LESME LESME** y, en su consecuencia 3.- **SUBSUMIR** el injusto reprochándole en las disposiciones del Art. 202 Inciso 1º numeral 5 del Código penal y, sobre la esta base; 4.- **SANCIONAR** al mismo con la pena privativa de libertad de DOS años, más sus accesorias legales, la que deberá computarse una vez que el condenado sea habido y puesto a disposición de la Justicia, descontando el tiempo que ha estado recluido hasta el momento de obtener su libertad con medidas sustitutivas de la prisión preventiva....”.-----

Tramitado el Recurso de Apelación en esta Instancia, el Abog. Amado Silvero, expresa agravios a tenor del escrito obrante a fs. 302/305 de autos, y solicita revocar con costas la Sentencia Definitiva N° 34 de fecha 4 de junio de 2004, manifestando entre otras consideraciones que: “*las actividades realizadas en el lugar por Alcibíades Lesme ha sido la tala de árboles en gran porte y quema indiscriminada de los mismos afirmación falsa que se desvirtúan con la simple mirada de las tomas fotográficas obrantes en autos que conforme a ellos no se observan sino tres árboles de mediano porte que ya estaban caídos por obras de la naturaleza sustentados dichas teorías en el informe pericial del Ing. Agrónomo Edgar Benítez, pieza procesal nula conforme a lo establecido en el Art. 127 Inc. 4º vigente para este caso. Por otra parte sostiene que el querellante particular Matías González, en la que ha quedado establecida con claridad de que el mismo no tiene acción para asumir la querella por el delito contra el Medio Ambiente en la que ha reconocido expresamente de que el mismo nunca ha ejercido derecho alguno sobre el inmueble de referencia en cuya consecuencia es imposible admitir en estos autos pruebas y criterios no propuestos como ha quedado probado que en el lugar hace mucho tiempo ha dejado de existir montes altos conforme pericias mencionadas.*” Termina solicitando que el Acuerdo y Sentencia sea revocado con costas.-----

A fs. 308/311, rola el escrito de contestación presentado por los Abogados Matías Andrés González y Alberto Torres, en donde sostiene que el recurrente: “*ni siquiera tiene elementos de convicción suficientes para fundar, por ello obvia referirse a la sanción impuesta, ya que en la Sentencia recurrida el beneficiario resultó ser su defendido con la considerable reducción de la sanción penal impuesta al mismo, en virtud de la aplicación del Art. 321 del Código de Procedimientos Penales, siendo nuestra parte la más agraviada*”. Sostiene por otro lado que la prueba irrefutable ofrecida por nuestra parte y agregada al expediente principal, constituye el informe pericial emitido por un Perito Ambiental matriculado ante la Corte Suprema de Justicia, en donde el mismo señala “**no solo existe daño a la ecología sino que dicho daño sigue existiendo**”. En cuanto a la manifestación del recurrente a que el mandante no tiene para promover querella por delitos del medioambiente aclaramos que los delitos contra el medioambiente son de orden público es decir, de acción Penal Pública, porque sus consecuencias surten efectos contra la sociedad toda y no únicamente sobre el particular, siendo así que hasta cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la perpetración de un delito contra el medio ambiente, ponga en conocimiento a las autoridades correspondientes dicha situación para que el estado a través de sus órganos inicie la acción legal. Termina solicitando la confirmación de la Sentencia N° 34 de fecha 04 de junio de 2004, dictado por el Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná.-----

A su turno, el Fiscal General Adjunto Abog. Marcos Alcaraz, por Dictamen N° 3057 de fecha 12 de noviembre de 2004, solicita la Confirmación del Acuerdo y Sentencia 34 de fecha 04 de junio de 2004, dictado por el Tribunal de Apelación,

Primera Sala, de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná.-----

En este orden de consideraciones, corresponde realizar un pormenorizado análisis de las constancias obrantes en autos a fin de administrar recta justicia, y así tenemos las cuestiones señaladas por el recurrente en una confusa expresión de agravios, de la misma se puede deducir que el apelante trata de anular el proceso por las supuestas irregularidades cometidas durante el proceso, sin embargo de las constancias de la causa se puede notar no existieron violaciones constitucionales ni procesales para que sea procedente la nulidad. En el procedimiento penal anterior por la cual se rige la presente causa, el Juez de la causa es el director de la investigación, según como se puede desprender del Artículo 144 del Código Procedimientos Penales de 1890; el mismo artículo hace referencia al querellante particular y en la misma norma penal se refiere Art. 127 en cuanto a los requisitos que deben cumplir el querellante. Lo más importante que de acuerdo al Art. 144 señalado, las parte en el proceso puede manifestar cuales son las diligencias que creen conveniente para su desarrollo y el Juez las determina y los provee, si cree que son convenientes para la investigación de la causa. La nulidad de la querrela que pretende el apelante carece de sustento fáctico jurídico, conforme a la normativa señalada.-----

Atendiendo las normativas constitucionales referente al tema, tenemos el Art. 7, segunda parte: "Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente". El Art. 8 *DE LA PROTECCION AMBIENTAL. Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Así mismo, ésta podrá restringir o prohibir aquéllas que califique peligrosas....El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.*" En relación a la misma el Artículo 38 expresa: "Toda persona tiene derecho , individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública....y hagan elación con la calidad de vida..." El derecho Ambiental, es uno de los intereses difusos, el interés colectivo, exclusivo de la sociedad.-----

Los problemas ambientales que pueden acarrear la deforestación son múltiples, y es por ello necesita una respuesta jurídica para salvaguardar el ambiente dentro de un marco de la calidad de vida. El derecho ambiental tiene como una de las finalidades condicionar la conducta humana, hacia la protección de los recursos naturales, del bien común, trazado dentro del marco del derecho público y privado. Hay que tener en cuenta que este tipo de delitos, son sumamente graves, puesto que están en juego el valor "vida" de toda la sociedad. Es por ello que los recursos naturales se debe usarse con prudencia y no dilapidarse, la productividad del suelo debe ser conservada o mejorada.-----

Dentro de la normativa que protege el tipo de derecho se encuentra la Ley 422/79, que crea el Servicio Forestal Nacional, que entre unos de sus funciones se encuentra la política forestal, aprovechamiento y manejo de los bosques. Por otro lado se encuentra la Ley 294/93, que hace obligatoria el estudio del Impacto Ambiental, para dictaminar acerca de dicha evaluación. En la causa que nos ocupa se puede ver que el Juez de la causa solicitó al Servicio Forestal dicho informe, manifestando que en sus registros no existe constancia de solicitud para la habilitación de aprovechamiento de árboles en el predio en cuestión y al realizarse las precauciones correspondiente se ha podido verificar los daños. A fs. 14/28 de autos se encuentra las fotografías en donde se puede demostrar fehacientemente de que las talas de árboles se

produjeron categóricamente. Además se encuentra el Informe del Agrónomo Fidelino Benítez donde sostuvo las pérdidas de talas de bosque y su quemazón constituyen un daño a la ecología, por lo que corresponde la aplicación del Artículo 202 Inciso 1º Numeral 5 del Código Penal, aplicándole la pena de DOS AÑOS.

En estas condiciones corresponde CONFIRMAR el Acuerdo y sentencia N° 34 de fecha 04 de junio de 2004, dictado por el Tribunal Penal Primera Sala de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, con costas al recurrente. Es mi voto.-----

A su turno, los Doctores **WILDO RIENZI GALEANO y SINDULFO BLANCO** manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

De este modo se dio por terminado el acto, firmando los Señores Ministros, todo por ante mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue a continuación.-----

SENTENCIA NÚMERO: 875

Asunción, 5 de octubre de 2005

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la; -----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE

- 1- **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.-----
CONFIRMAR el Acuerdo y sentencia N° 34 de fecha 04 de junio de 2004, dictado por el Tribunal e apelación Penal, Primera Sala de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná y Canendiyú .-----
- 2- **IMPONER** las costas al recurrente.-----
- 3- **ANOTAR**, registrar y notificar.-----

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco.

Ante mí: Karinna Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial.